

Sin seguridad no hay progreso

Balance de seguridad democrática de la administración del Presidente Uribe

Whitout Security there is no progress
Assessment of the Uribe Administration's
Democratic Security

Resumen

El autor presenta aspectos del balance sobre la política de seguridad democrática adelantada en estos dos años de la administración del presidente Uribe Vélez, sus logros y aciertos, también sus puntos débiles y los posibles futuros escenarios. El balance fue hecho por la Fundación Seguridad Democrática que preside el autor. El texto reconoce los aspectos muy positivos de esta política como una mayor seguridad en las carreteras, se vive un ambiente de seguridad que trasciende las fronteras. Los inversionistas extranjeros ven con otros ojos a Colombia, lo que ha permitido mejores resultados en los indicadores económicos de crecimiento e inversión. Se han reducido los homicidios, los secuestros y los actos de sabotaje a la infraestructura económica.

Después de describir las cuatro estrategias de la administración Uribe: aumento del Presupuesto para seguridad, incremento del pie de fuerza, ajustes a la legislación vigente y participación y colaboración ciudadana contra el delito, el autor plantea que no son aún épocas para cantar victoria y que por ningún motivo se puede bajar la guardia en estos temas de seguridad.

Summary

The author presents an assessment of the Uribe Administration's democratic security policy, its achievements and successes, its weaknesses and possible future scenarios. The assessment was conducted by the Democratic Security Foundation, chaired by the author. The paper recognizes very positive aspects of this policy such as improved road security and a sense of security that goes beyond our borders. Foreign investors are looking at Colombia with different eyes, a fact

Palabras Clave

Seguridad democrática, Orden público, Violencia, Guerrilla, Fuerzas Militares

- 1 Economista de la Universidad Nacional, politólogo y catedrático de la Universidad de los Andes, exconsejero presidencial de Seguridad Nacional, exasesor del Ministerio de Defensa y asesor de Naciones Unidas, Consultor nacional e internacional sobre temas de paz y conflictos, columnista de El Tiempo. Autor de decenas de artículos sobre el conflicto armado en Colombia publicados en revistas académicas nacionales e internacionales. Autor del libro sobre *El conflicto armado en Colombia*. En la actualidad es director de la Fundación Seguridad Democrática, un centro de estudios sobre seguridad y defensa nacional.

that has resulted in improved economic indicators of growth and investment, as well as fewer homicides, kidnappings and sabotage acts against the economic infrastructure.

After describing the four strategies of the Uribe Administration: increase in security budget, increased armed forces, adjustments to current legislation and citizen participation and collaboration against crime, the author states that we must not perceive this as a time to claim victory and that we must not lower our guard.

Se debe un reconocimiento al gremio palmero, constructores de futuro, por su abnegación, patriotismo, dedicación a esa labor tan fecunda y tan productiva en provecho de la Patria, del pueblo colombiano, de su economía, en beneficio del futuro de esta nación que, sin duda, tiene en la palma de aceite uno de sus recursos estratégicos de largo plazo que darán viabilidad futura a este país.

En esta presentación se hace una visión panorámica, una especie de balance sobre el Programa de seguridad democrática del Presidente Uribe, sus logros y aciertos, también sus puntos débiles y los posibles escenarios. El tema de la seguridad es clave y estratégico en la Colombia de hoy y del futuro.

Sin seguridad definitivamente no hay progreso, no hay desarrollo y de ninguna manera hay democracia, por ello este tema se ha colocado en el centro mismo de la agenda política nacional y ese es uno de los primeros méritos que habría que reconocerle al Presidente: haberlo colocado en el centro de la agenda nacional. Haber tenido el valor de poner la seguridad democrática sobre la mesa cuando en general los colombianos y sobre todo su clase dirigente lo habían evadido: no era un tema electoral.

El tema de la seguridad en un país con tantos problemas de inseguridad como Colombia, de manera paradójica era marginal y se hacía de lado en la agenda política porque siempre se refería de manera exclusiva al gasto militar, que a su vez se veía como poco importante frente a otras urgencias nacionales.

Y así llegó el momento en que no se podía seguir evadiendo y había que enfrentarlo. La decisión de enfrentar el problema de la seguridad sin duda ha sido uno de los grandes méritos del presidente Uribe Vélez. Y al hacer un balance de lo que va corrido de esta administración hay un resultado tangible, de bulto y significativo, en términos de la ejecución de la política de seguridad democrática del actual gobierno: ha cambiado la percepción que los colombianos tenemos de nuestra propia seguridad.

Hoy en día nos sentimos más seguros que cuando empezó la administración, que vivimos en un país más seguro al de hace dos años al final de la administración Pastrana, cuando culminaron los diálogos frustrados de paz con las Farc. Se vive un ambiente de seguridad que trasciende las fronteras, que ha ido más allá de los límites patrios, los inversionistas extranjeros están viendo con otros ojos a Colombia, y quienes valoran el riesgo del país, de igual modo, tienen otra perspectiva de lo que aquí sucede. Eso ha contribuido de alguna manera a reactivar la economía, así como a generar mejores expectativas de crecimiento y de inversión.

Mejoran los indicadores

Esa mejor percepción de seguridad no es sólo subjetiva sino que puede corroborarse con las cifras y con los hechos a los que se les puede hacer seguimiento, hechos que se pueden medir con indicadores para hacer evaluaciones concretas, pragmáticas y específicas sobre la evolución de la seguridad.

A principios de 2004 la Fundación Seguridad y Democracia adelantó una valoración sobre el comportamiento de la seguridad en el 2003 y, en efecto, los indicadores evaluados -los cuales no siempre coinciden con los del gobierno- muestran una mejoría en la tendencia general.

En algunas ocasiones funcionarios y voceros del gobierno se han mostrado quisquillosos cuando se les mencionan ciertos lunares que obviamente existen en el tema de la seguridad, tal y como lo ha reconocido en ocasiones el propio Presidente de la República. Incluso él mismo en alguna entrevista reciente al ser interrogado sobre lo bueno de la administración dijo que no estaba muy ocupado de lo bueno sino de lo malo, en un gesto de autocrítica y de generosidad.

Reducción de homicidios

Pese a que en Colombia los homicidios siguen siendo un problema crítico de seguridad con uno de los índices más altos del mundo, en 2003 con relación al 2002 disminuyeron en cerca de 23%, siendo la cifra más baja de los últimos dieciséis años.

En cierta medida esa disminución muy sustantiva de los homicidios en Bogotá y Medellín se debe a las políticas adelantadas por los alcaldes locales para mejorar este indicador de seguridad. Se trata de un esfuerzo conjunto de las administraciones central y locales.

Bajan los secuestros

El secuestro también se ha reducido. A escala nacional disminuyó en 39%, debido en buena parte a que hay una mayor seguridad en las carreteras y a una mayor presencia de la Fuerza Pública, esto ha frenado las llamadas pesacas milagrosas de la guerrilla, que son secuestros colectivos que incrementaban la cantidad de plagios en el país.

Esa reducción también se ha debido a la crisis por la que atraviesa el ELN, movimiento que se encuentra en una difícil situación de tiempo atrás, razón por la cual la cantidad de secuestros realizados por esa organización subversiva se redujo en cerca del 50%. Este debilitamiento del ELN también se debe a la acción persistente, constante y ofensiva de la Fuerza Pública en muchos sitios del país en donde este grupo ha tenido unos reductos muy importantes. Este podría ser el caso del oriente antioqueño con el frente Francisco Buitrago.

No obstante, si bien el secuestro muestra una tendencia positiva hacia su disminución, su índice en Colombia sigue siendo muy alto y preocupante, y si bien la situación varía de una región a otra, hay que anotar una mayor eficiencia de la Fuerza Pública por desvertebrar muchas bandas de secuestradores.

Sabotaje económico

De igual modo ha habido una disminución importante de atentados terroristas contra la infraestructura económica nacional. Los ataques a la infraestructura de comunicaciones han bajado en cerca de 70% y a la energética en 40%; no obstante, en la infraestructura petrolera se observa un incremento de ataques contra el Oleoducto del Sur, el de Orito-Tumaco, pero se han reducido los atentados contra el de Caño Limón Coveñas. Hay que señalar que los primeros tienen menos visibilidad ante la opinión pública y un menor impacto sobre la economía nacional. El gobierno ha tenido éxito en la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta que la mayor parte del crudo sale por allí; ello se ha logrado gracias a un incremento del pie de fuerza en esa región y a la ubicación de grupos especializados para su vigilancia, lo

Las políticas adelantadas por el gobierno para avanzar hacia la seguridad democrática se podrían resumir en cuatro estrategias: aumento del presupuesto para seguridad, incremento del pie de fuerza, ajuste de la legislación vigente, y promoción de una más decidida colaboración ciudadana con las autoridades para perseguir el delito.

Pese a todos los esfuerzos la mejora en cuanto a la situación de seguridad del país aún no está consolidada ni es definitiva, como tampoco se puede decir que sea irreversible.

que ha frenado los sabotajes por parte de los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN presentes en Arauca.

Otro factor que muestra avances en el tema de la seguridad es el aumento en las deserciones de los grupos irregulares, debido a la puesta en marcha de un programa más consistente, estructurado y sólido de promoción de la deserción de los grupos irregulares, indicador que ha aumentado en cerca de 33% en 2003 con relación al 2002.

Los anteriores aspectos han conducido a una mejora en los indicadores de derechos humanos, por ejemplo, el desplazamiento forzoso ha disminuido en cerca de 45% en ese mismo periodo. Si bien la situación sigue siendo muy crítica y complicada, es un hecho que hay menos secuestros, homicidios, desplazamiento y masacres, lo que alivia en parte la crisis humanitaria que vive el país.

Cuatro estrategias

Las políticas adelantadas por el gobierno para avanzar hacia la seguridad democrática se podrían resumir en cuatro estrategias: aumento del presupuesto para seguridad, incremento del pie de fuerza, ajuste de la legislación vigente, y promoción de una más decidida colaboración ciudadana con las autoridades para perseguir el delito.

Aumento del presupuesto para seguridad

La primera estrategia ha consistido en un incremento importante del presupuesto de seguridad y defensa nacional. A comienzos del gobierno con el impuesto al patrimonio se recogieron cerca de 800 millones de dólares, lo que equivale a un Plan Colombia y medio anual, pues para efectos de seguridad este Plan ha contado en promedio con cerca de 500 millones de dólares anuales. Es decir, que el esfuerzo de los colombianos ha permi-

tido una mayor inversión en nuestra propia seguridad y defensa.

Gracias al valor civil del gobierno nacional se ha avanzado pero no es suficiente; falta camino por recorrer y los esfuerzos que habrá que realizar en el futuro podrían ser de mayor envergadura que los ya realizados, porque los factores de inestabilidad y las amenazas a la seguridad continúan prácticamente intactos en algunos casos, en otros todavía mantienen una gran capacidad de desestabilización y de amenaza. Por ello no se debe bajar la guardia por ningún motivo.

En cuanto al incremento del presupuesto en defensa y seguridad, el gran reto hacia el futuro consiste en mantener ese propósito en medio de una situación fiscal muy precaria y complicada en la que el gobierno tiene escaso margen de maniobra y en la que tendrá que recurrir de manera persistente al esfuerzo de todos los ciudadanos para recuperar seguridad. El gobierno se ha propuesto incrementar 25% en términos reales el presupuesto anual de seguridad y defensa nacional.

Aumento del pie de fuerza

La segunda estrategia de seguridad tiene que ver con el aumento del pie de fuerza tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional.

La Policía ya llega a cerca de 190 municipios donde no tenía presencia y el pie de fuerza militar se ha aumentado en cerca de 20 mil hombres, sobre todo con el programa de soldados campesinos que es nuevo y creado por esta administración.

Sin embargo, el tamaño de las dos fuerzas de seguridad es todavía insuficiente frente a la gravedad de las amenazas y a la extensión del territorio nacional. Esta precariedad se aprecia mejor si se compara la situación de Colombia con la de muchos otros países que están en paz, democráticos

y civilistas que no tienen ni de lejos los problemas de narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, delincuencia organizada y común. Francia, por ejemplo, tiene el doble de policías por cada cien mil habitantes que los que tiene Colombia.

Lo mismo sucede con el Ejército. Colombia tiene más o menos la misma cantidad de soldados que España pero el doble de territorio, lo que significa que Colombia tiene la mitad de soldados por kilómetro cuadrado que España. Y en los países donde ha habido conflictos internos la cantidad de soldados por cada cien mil habitantes son dos, tres, cuatro y hasta cinco veces los que en la actualidad tiene Colombia.

Ajustar la legislación vigente

La tercera estrategia ha sido la de ajustar la legislación vigente en el tema de la seguridad y la defensa nacional. En esto a los colombianos, y en especial a nuestra clase política, nos ha faltado mucho valor civil para legislar de acuerdo con las circunstancias. Algunos gobiernos en el pasado intentaron establecer alguna especie de estatuto antiterrorista pero con poco éxito, pues esas aspiraciones fueron frustradas por el Congreso o por las Cortes. Finalmente en este gobierno se ha logrado hacer una reforma constitucional, que faculta a las autoridades para hacer detenciones de personas, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial, con el fin de evitar actos terroristas.

Asimismo ese estatuto posibilita a las autoridades para hacer empadronamientos, registros y control de la población en ciertas zonas del país en donde es necesario para limitar el margen de acción de los grupos irregulares.

Esta reforma constitucional es objeto de una reglamentación en el

Congreso de la República; allí se definirán las condiciones, circunstancias, autoridades, controles y garantías, para la utilización de este tipo de facultades constitucionales.

Países como Estados Unidos y muchos europeos han adoptado estatutos antiterroristas más rígidos al nuestro; sin embargo, el de aquí causa alarma a algunas personas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que no comprenden la gravedad de la situación y la urgencia de tener este tipo de mecanismos extraordinarios que si bien limitan las libertades de los ciudadanos, se requieren en aras del bien común y de la seguridad colectiva. El uso de estas facultades podría, en efecto, limitar las garantías procesales de unas cuantas personas pero a cambio asegurar las libertades colectivas de la gran mayoría, dilema que se ha vivido también en muchos países de Europa, donde la dirigencia política, con el apoyo de la población, han optando por hacer ese tipo de restricciones temporales a las libertades y a las garantías procesales de algunos en aras de la seguridad de todos.

Participación y colaboración ciudadana contra el delito

Y la cuarta estrategia se relaciona con una promoción activa de la colaboración ciudadana en la persecución y prevención del delito. En esta área también se debe reconocer que el Presidente Uribe tuvo un gran valor civil y se la jugó frente a una iniciativa que había sido vista por sus críticos como una especie de promoción del paramilitarismo.

Estas son iniciativas que ya existen en otros países del mundo, como Gran Bretaña con las juntas de vecinos, o incluso en Bogotá, por ejemplo, con los frentes locales de seguridad; se trata de asociaciones de vecinos para interactuar de manera rápida con las

autoridades y brindar seguridad en su propio entorno.

Pero cuando este tipo de iniciativas se traslada a las zonas rurales, las connotaciones son distintas y las voces de los críticos se hacen más fuertes. Las redes de informantes, en efecto, tienen problemas como en todas partes donde se han promovido este tipo de mecanismos, pues siempre habrá quien los utilice para saldar cuentas con el vecino por problemas de plata, celos, intrigas y envidias acuse falsamente al vecino de ser miembro de un grupo irregular.

Por ello es necesario que las personas de esas redes tengan capacitación, adiestramiento, actitud honesta y positiva de colaboración con las autoridades y no oportunista en busca de dinero, de venganza personal o de ajuste de cuentas. Creo que en muchos sitios del país estas redes han contribuido a garantizar la seguridad en las carreteras y a la captura de algunos miembros de grupos irregulares, y por eso vale la pena seguirlas apoyando. Siempre se debe estar atentos para que no se cometan abusos y excesos y no se desborden sus facultades y acciones.

La estrategia de seguridad también contempla programas adicionales de seguridad en las carreteras, conformación de batallones de alta montaña y de nuevas brigadas móviles, aumento de grupos especializados antisequestro de cuidado del oleoductos y la modernización de la Fuerza Pública.

"No se puede bajar la guardia"

Pese a todos los esfuerzos la mejoría en cuanto a la situación de seguridad del país aún no está consolidada ni es definitiva, como tampoco se puede decir que sea irreversible. Se ha avanzado pero no se puede bajar la guardia, porque los factores de amenaza e inestabilidad continúan activos. Es una

situación que eventualmente podría revertirse y desmejorarse si el gobierno no mantiene el esfuerzo en que se ha empeñado y no se sostiene el apoyo ciudadano a su política de seguridad democrática. La peor actitud que podría predominar sería la del triunfalismo y el exceso de optimismo. Si bien son significativos los golpes dados a la guerrilla y a los paramilitares, como capturas de jefes y la caída de varios de sus dirigentes, si bien se registran avances, no hay que olvidar que, por ejemplo, la estructura militar de las Farc está prácticamente intacta y no se puede afirmar que se ha quebrado el espinazo a las Farc o que la tendencia de evolución del conflicto haya cambiado de manera definitiva e irreversible, ese no puede ser ni mucho menos el balance de estos meses.

El ELN definitivamente está muy debilitado y eso sí es irreversible. Habría que esperar un desgrane de muchos frentes y una división interna que debería ser aprovechada por el Estado para desarticular y desmovilizar algunos de los frentes que están en situación crítica. Por su parte los grupos de autodefensa nunca habían estado tan fuertes, tan *empoderados*, tanto en lo militar, como en lo económico y político, y ante esta situación el gobierno tiene un inmenso reto hacia el futuro.

En parte el mejoramiento de la situación de seguridad ha sido motivada por el relativo receso o repliegue calculado en que han entrado algunos de los grupos de las Farc. Están en una situación de repliegue forzado, en parte debido al poderío aéreo de las Fuerzas Militares y ya no pueden hacer esos grandes movimientos de guerrilleros porque la Fuerza Aérea los detecta, hay inteligencia técnica que les impide moverse, hay una capacidad de respuesta mayor, se ha cuadruplicado la capacidad de transporte y combate aéreo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, este grupo se ha replegado de manera calculada y metódica a la espera de que el gobierno, como es natural, se debilite, pierda apoyo, encuentre situaciones difíciles, pero también para examinar los puntos críticos de la estrategia oficial de seguridad, antes de pasar a una contraofensiva en el futuro. Las Farc está ganando tiempo a la espera de que el gobierno se desgaste para en algún momento contraatacar, lograr un impacto en la opinión tratando de demostrar que no ha sido derrotada y que el esfuerzo para derrotarla ha sido en vano, lo que afectaría las posibilidades de reelección del Presidente Uribe.

Posible contragolpe de las Farc

Si en algún momento uno de estos grupos logra transmitir la impresión a la ciudadanía que la política de seguridad no ha sido tan exitosa como parecía, muy probablemente el apoyo ciudadano, que es tan voluble, se podría menoscabar y disminuir, y esa podría ser la estrategia de las Farc y el ELN.

En la Fundación Seguridad y Democracia hemos contabilizado para el 2003 un mayor número de acciones que en el 2002, año este último de gran actividad guerrillera al ser el momento del rompimiento de la zona de distensión de los diálogos de paz con el gobierno Pastrana, a los que siguieron una avalancha de acciones muy fuerte por parte de las Farc.

Las acciones de ahora son menos visibles, incluso de muchas de ellas ni siquiera se informa en los medios de comunicación. Consisten en pequeños hostigamientos y emboscadas, las que se realizan en muchos sitios del país y dan a entender que la guerrilla no está tan inactiva como parece.

Sin embargo, existe una actividad guerrillera que se ha trasladado a las

vías secundarias y cuyo impacto publicitario es mucho menor y ni siquiera los medios de comunicación dan cuenta de ello, porque es obvio que las fuerzas del orden no pueden tener el control absoluto sobre todas las carreteras del país. Muestra de ello han sido los paros armados en muchas zonas del país como oriente antioqueño, Arauca, Magdalena, Chocó y Nariño, lo que significa que la guerrilla todavía conserva esa capacidad de hacer daño, de desestabilizar y por ello no se puede bajar de ninguna manera la guardia.

Diálogo con paras: en la cuerda floja

Los grupos paramilitares de igual modo han bajado el nivel de su actividad, lo que ha contribuido a que haya menos masacres, asesinatos y desplazamientos forzosos en muchas zonas del país, pero también se debe a una razón de cálculo. Estimaron que el diálogo con esta administración podía ser positivo y útil para sus propios intereses y se embarcaron en unas conversaciones de paz que se observan muy enredadas y emboladas por razones más que todo de oportunidad y por el manejo que se les esta dando.

Los grupos de autodefensa ilegales son la consecuencia de una causa, que es la existencia de la guerrilla que hostiga y depreda a la población civil en muchas zonas del país, de un lado, y a la debilidad del Estado para garantizar la seguridad para todos los ciudadanos en distintos lugares, de otro lado. La violencia depredadora de la guerrilla y la debilidad del Estado explican el surgimiento de los grupos de autodefensa.

En esa lógica política se podría afirmar que primero habría que acabar con la causa, es decir, con la guerrilla, ya sea por la vía militar o por la negociación, antes de pensar que los grupos paramilitares se pudieran desmovilizar. En efecto, mientras

El narcotráfico es otro factor de incertidumbre en el país. Es el gran combustible de las distintas formas de violencia y en esta lucha tampoco puede haber triunfalismo, pues si bien se ha reducido el área global sembrada de coca, no ha estado acompañada con una reducción del producto total exportado de droga.

exista guerrilla y no haya una capacidad suficiente del Estado para controlarla siempre habrá grupos paramilitares. Y en eso ha habido un error de cálculo tanto del gobierno como de los paramilitares.

De manera equivocada el gobierno nacional consideró que controlaría a la guerrilla en un término de seis meses, lo que posibilitaría los diálogos de paz con las autodefensas y su desarticulación. Las autodefensas también pensaron lo mismo. Pero el cálculo ha fallado y la guerrilla sigue prácticamente intacta, lo que dificultará en forma crítica el avance de las conversaciones y la desmovilización de los grupos de autodefensa.

En efecto, esta es una meta muy difícil de cumplir y los diálogos de Santa Fe de Ralito están en la cuerda floja y podrían entrar en crisis cuando el Congreso defina cuáles son las condiciones jurídicas bajo las cuales se van a desmovilizar los grupos de autodefensa. Esas condiciones ya se han hecho públicas: implican entre cinco y diez años de cárcel, confesión de delitos, reparación de las víctimas, expropiación de bienes mal habidos, riesgo de extradición. En últimas es el Congreso el que tendrá la potestad de determinar finalmente las condiciones de desmovilización, que no serán negociadas con los grupos de autodefensa. Cuando se definan esas condiciones muy probablemente las autodefensas se van a dividir. Algunos pocos grupos se concentrarán, entrarán en una tregua verdadera y se desmovilizarán de acuerdo con esas condiciones; pero muchos otros no las aceptarán, se retirarán de los diálogos y continuarán alzados en armas y realizando actividades violentas.

En medio de esta gran incertidumbre, el costo lo está pagando el gobierno nacional y los réditos los están cobrando prácticamente gratis los grupos de autodefensa, gracias al escenario que

se les ha brindado en Santa Fe Ralito: allí las autodefensas hacen relaciones públicas, contactos políticos, encuentros con diversos sectores, etcétera. Y sin ningún costo, porque también se debe reconocer que el gobierno ha sido muy flojo y poco exigente con estos grupos. En efecto, desde el comienzo el Gobierno dijo que para iniciar acercamientos o diálogos de paz con cualquier grupo irregular, este debía decretar de manera unilateral e incondicional una tregua y un cese de hostilidades.

Pero durante un año y medio se han dado acercamientos con los grupos paramilitares, pero no ha habido tregua como tampoco cese de hostilidades. La Procuraduría ha denunciado cerca de doscientos asesinatos de estos grupos y el mismo día en que se firmaba el acuerdo de Santa Fe Ralito hubo un asesinato de seis indígenas wayúu en la Guajira por parte de un grupo que aparentemente estaba en conversaciones con el gobierno. Pero lo más grave es que estos grupos se dan el lujo de proponer cinco lugares donde dicen estar dispuestos a concentrarse, siempre y cuando el gobierno garantice la seguridad de esas zonas para impedir el retorno de la guerrilla.

La paradoja del gobierno

A partir de ahí el gobierno y el Comisionado de Paz en una actitud muy evasiva dicen que habrá desmovilizaciones donde sea posible y concentraciones donde sea necesario. Es decir, el gobierno está frente a una situación paradójica, porque no está en condiciones de hacer cumplir sus propias condiciones, pues exige tregua pero no puede garantizar condiciones de seguridad para los grupos dispuestos a cumplirla. Lo grave es que el cumplimiento de la tregua es una condición indispensable para que las comunidades nacional e internacional crean y apoyen el proceso.

Desde el comienzo el Gobierno dijo que para iniciar acercamientos o diálogos de paz con cualquier grupo irregular, este debía decretar de manera unilateral e incondicional una tregua y un cese de hostilidades.

Ningún país como tampoco ninguna entidad multilateral le apuestan hoy un peso al éxito de la desmovilización de las autodefensas, porque no ven las condiciones para que haya una posibilidad real de concentración y de cese al fuego y ello conduce a que las posibilidades de éxito del proceso sean cada vez más precarias. Incluso la comisión de la OEA no cuenta con las condiciones necesarias para hacer el proceso de verificación. En síntesis, la situación es muy incierta frente a los resultados que pudieran arrojar los diálogos con los paramilitares.

De otra parte, el gobierno podría pasar en blanco frente a los acercamientos con la guerrilla puesto que para ella las condiciones exigidas por el gobierno son inaceptables. Hacia el futuro la reanudación de las conversaciones de paz con las guerrillas se dará en una de estas dos circunstancias: un debilitamiento de la guerrilla que la obligue a aceptar las condiciones actuales que le impone al gobierno nacional, o un estado de fatiga y de cansancio tanto por parte del Estado, como de la misma guerrilla que los obligue a conciliar y acordar nuevas condiciones de negociación.

La incertidumbre del futuro

Entonces ¿qué sucederá hacia el futuro con estas probabilidades de paz? No se dará el ambiente propicio para que haya ningún tipo de acercamiento entre la guerrilla y el gobierno. Al final del mandato la guerrilla podría intentar cambiar la percepción de los ciudadanos sobre el éxito de la política de seguridad del gobierno y aspiraría a incidir en el resultado de las próximas elecciones. Apostaría a propiciar un movimiento pendular de la opinión pública y trataría de impedir la eventual reelección del Presidente Uribe por la vía del sabotaje, del terrorismo, de la desestabilización, del amedrentamiento a los ciudadanos. Contemplar

seriamente esta posibilidad significa dar un campanazo de alerta para evitar que la guerrilla influya de nuevo en las elecciones, como sucedió en la decisión electoral del Presidente Pastrana.

Situación con las fronteras

Hay otro tipo de factores que influyen como son las circunstancias del entorno con Ecuador y Venezuela, que son inciertas y constituyen también aspectos de riesgo e incertidumbre. Para nuestro caso el armamentismo del Presidente Chávez y sus intenciones de formar algún lío en la frontera con Colombia no se deberían descartar, porque está de por medio su actitud de convivencia y de simpatía con la guerrilla colombiana, y la presencia de esta en la zona fronteriza ha sido corroborada.

El incesante tráfico de armas, de explosivos, de municiones y de pertrechos, desde Ecuador y Venezuela hacia Colombia son factores que también contribuyen a la desestabilización del país, y al gobierno sólo puede acudir a las diligencias diplomáticas para solicitarle a los vecinos que por favor contribuyan a blindar las fronteras y ponerle freno a que esas circunstancias se sigan presentando.

Y el narcotráfico

El narcotráfico es otro factor de incertidumbre en el país. Es el gran combustible de las distintas formas de violencia y en esta lucha tampoco puede haber triunfalismo, pues si bien se ha reducido el área global sembrada de coca o amapola en 20 o 30%, no ha estado acompañada con una reducción del producto total exportado de las 800 toneladas de droga y por ellos los grupos irregulares que viven del narcotráfico no han padecido menoscabo en sus ingresos, lo que estaría comprobado por los precios al consumidor final que no han tenido grandes variaciones ni en Estados Unidos ni en Europa.

Ello significa que el éxito ha sido relativo en cuanto a la estrategia de disminuir los ingresos de esos grupos para debilitarlos, por ello se debe concertar con Estados Unidos una estrategia que no esté basada exclusivamente en las fumigaciones, sino que tenga más énfasis en la interdicción

aérea pues el transporte del producto final es el punto más crítico de la cadena del narcotráfico y no es conveniente empeñarse de manera terca en que sólo a través de las fumigaciones se logran resultados en la lucha contra las drogas.